

**INCIDENTE EN REVISIÓN 2195/2015**

**QUEJOSA:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Y OTRAS

**RECURRENTE: JEFE DEL SERVICIO DE  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**

**MAGISTRADA PONENTE:  
ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.**

**SECRETARIA:  
MIRNA PÉREZ HERNÁNDEZ.**

Ciudad de México. Acuerdo del **Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México**, correspondiente a la sesión del diez de febrero de dos mil dieciséis.

**V I S T O S**, para resolver el recurso de revisión **2195/2015** interpuesto contra la resolución interlocutoria dictada por el **Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal<sup>1</sup>**, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **5477/2014**, originalmente radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, con el número **2343/2014**.

---

<sup>1</sup> Se aclara que el nombre de los órganos jurisdiccionales con residencia en la actual Ciudad de México que se mencionan en la presente resolución, corresponde a la denominación oficial que tenían en la fecha de los hechos que se relatan; en el entendido de que en términos del “*Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación del Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo*”, todas las referencias que se hagan al Distrito Federal se deben entender hechas a la Ciudad de México.

**ANTECEDENTES  
GENERALES:**

**PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.**

De las constancias que integran el cuaderno incidental, se advierte que \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ veintisiete empresas más, promovieron a través de sus respectivos representantes legales, juicio de amparo indirecto contra las autoridades y actos que precisaron en la forma siguiente:

“(...)

**IV. ACTOS RECLAMADOS**

*1. Del H. Congreso de la Unión se reclama la discusión y aprobación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.*

*En lo particular, se reclaman los artículos 28, fracción IV, 42, fracción IX, y 53-B del Código Fiscal de la Federación, como parte de un mismo sistema normativo, que a la letra disponen lo siguiente:*

*(...)*

*2. Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación y orden de expedición del Decreto señalado en el numeral 1 del presente apartado, mismo que contiene las disposiciones cuya inconstitucionalidad se reclama.*

*Asimismo, del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la expedición del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado el 2 de abril de*

*2014, en concreto el artículo 33, apartado B, fracción I, por formar parte del mismo sistema normativo de los actos reclamados antes señalados, cuyo tenor literal es el siguiente:*

*(...)*

**3.** *Del C. Jefe del Servicio de Administración Tributaria se reclama la emisión de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 2014, específicamente, las Reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8., el artículo Décimo Tercero Transitorio y el Anexo 24, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de julio de 2014, cuyo tenor literal es el siguiente:*

*(...)*”. [Fojas 2 a 6 del cuaderno incidental].

En el capítulo respectivo de la demanda, las quejasas solicitaron “...la suspensión provisional y definitiva de los efectos y consecuencias que se derivan de las normas reclamadas en el presente juicio de amparo; esto es, para el efecto de que mis representadas no se encuentren obligadas a ingresar de forma mensual su información contable a las autoridades señaladas como responsables, a través de su página de internet, hasta en tanto ese órgano de control constitucional determine la regularidad constitucional de las normas reclamadas.” [Fojas 134 ídem].

## **SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.**

De la demanda correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, cuyo titular la registró con el número **2343/2014**, la **admitió a trámite** y, entre otras cuestiones, ordenó abrir por separado y duplicado el incidente de suspensión; en el

cual, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, **negó la suspensión provisional** de los actos reclamados. [Folios 146 a 155 ídem].

### TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA.

Posteriormente, las quejas presentaron **escrito de ampliación de demanda** en contra del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de quien reclamaron “...la emisión de la Tercera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2014, la cual entró en vigor a partir del 20 de agosto de 2014, únicamente por lo que se refiere a las reglas 1.2.8.6; 1.2.8.9 y el artículo Décimo Tercero Transitorio.” [Fojas 193 a 208, ídem].

En proveído de veintisiete de enero de dos mil quince, dictado en el cuaderno principal, el **Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal**, tuvo por recibidos los autos que le fueron remitidos por el juez de origen, de conformidad con el punto de acuerdo **GEN./013/2014** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; los **radicó** con el número **5477/2014**, **se avocó a su conocimiento** y admitió a tramite la ampliación de demanda [páginas 209 ídem].

En auto de la misma fecha dictado en el cuaderno incidental, el juez de distrito declaró válido todo lo actuado por el juzgador de origen, señaló fecha y hora para la verificación de la audiencia

incidental y otorgó la suspensión provisional solicitada por las quejosa en la ampliación de la demanda. [Fojas 210 a 219 ídem].

#### **CUARTO. AUDIENCIA INCIDENTAL.**

El **diecisiete de febrero de dos mil quince**, el juez de distrito celebró la audiencia incidental y emitió resolución interlocutoria, autorizada el **dieciocho de ese mes y año**, en la que resolvió:

“(…)

**PRIMERO.** Se **NIEGA** la suspensión definitiva, por los motivos expresados en el tercer considerando de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **CONCEDE** la suspensión definitiva, para los efectos precisados en el último considerando de esta interlocutoria.

(…)”. [Fojas 270 a 277 del cuaderno incidental].

#### **QUINTO. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.**

Inconforme con dicha resolución, la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “5” de la Administración General de Grandes Contribuyentes del **Servicio de Administración Tributaria**, en representación del Titular de dicho organismo, interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado a este tribunal colegiado, el veintiocho de agosto de dos mil quince, por lo que en auto de treinta y uno de ese mismo mes y año, el magistrado presidente ordenó su registro con el número **2195/2015** y **lo admitió a trámite** [fojas 19 y 20 del presente expediente].

Mediante diverso proveído de presidencia de dieciocho de septiembre de dos mil quince, se turnaron los autos a la **magistrada Andrea Zambrana Castañeda**, para la formulación del proyecto de sentencia respectivo (página 36 ídem].

#### **SEXTO. NUEVA INTEGRACIÓN DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL.**

Por acuerdo de presidencia de veintisiete de octubre de dos mil quince, se ordenó hacer del conocimiento a las partes que a partir del uno de noviembre del mismo año, este Tribunal Colegiado, queda integrado de la siguiente manera: magistrada **Andrea Zambrana Castañeda**; magistrado **Luis Fernando Angulo Jacobo**, por comisión temporal, en sustitución del magistrado José Manuel Villeda Ayala; así como el magistrado **César Thomé González** siendo presidente en esa fecha, el tercero de los nombrados.

### **CONSIDERACIONES JURÍDICAS:**

#### **PRIMERA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR.**

Este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver los presentes recursos de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos **81**, fracción **I**, inciso **a)**, y **84** de la Ley de Amparo vigente; **37**, fracción **II**, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales **20/2009**, **47/2009**, 19/2010 (que modifica al primero) y **5/2015** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de se recurre una interlocutoria pronunciada en audiencia incidental, en la que se **negó parcialmente y se concedió la suspensión definitiva contra los efectos de algunas de las normas que regulan la denominada contabilidad electrónica y el uso del buzón tributario**, a que se alude en el último de los Acuerdos mencionados.

**SEGUNDA. OPORTUNIDAD DEL RECURSO.**

El recurso de revisión interpuesto en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, se presentó dentro del término que señala el artículo **86** de la Ley de Amparo vigente, tal como se advierte del cuadro que enseguida se inserta.

Fecha de autorización de la resolución recurrida:	Notificación a la citada autoridad:	Surtió efectos:	Plazo de 10 días transcurrió:	Fecha de presentación del recurso:	Días inhábiles que mediaron dentro del plazo:
18 de febrero de 2015.  (Folios 270 a 277 del cuaderno incidental).	19 de febrero de 2015.  (Folios 283 <i>idem</i> ).	19 de febrero de 2015.	Del 20 de febrero al 05 de marzo de 2015.	24 de febrero de 2015.  (Páginas 03 del presente expediente).	21, 22 y 28 de febrero y 01 de marzo de 2015, por ser sábados y domingos.

**TERCERA. DISTRIBUCIÓN DE COPIAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO.**

La magistrada ponente, por conducto de la secretaria proyectista, entrega a los integrantes de este tribunal colegiado, para la resolución del asunto, copia tanto del oficio de agravios, como de la resolución interlocutoria recurrida y se inserta copia autorizada de esta última al presente toca.

**CUARTA. CUESTIONES EXCLUIDAS DE LA REVISIÓN.**

No es materia de la revisión la **negativa** de la suspensión definitiva decretada en el punto resolutivo primero de la resolución interlocutoria recurrida, regida por el considerando tercero, en relación a la negativa de la suspensión definitiva de los actos vinculados con el proceso de creación de las normas reclamadas, dada la falta de impugnación por la parte a quien perjudica tal determinación.

**QUINTA. EXAMEN DE LOS AGRAVIOS.**

Por cuestión de método, los agravios formulados por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, se estudiarán en un orden distinto al propuesto.

**I. FALTA DE ACREDITACIÓN DEL INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS SUSPENSIONAL**

En el **agravio tercero**, la autoridad recurrente aduce que resulta improcedente la concesión de la suspensión definitiva de



los efectos de las normas reclamadas, debido a que por su sola entrada en vigor no generan lesión alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa.

Lo anterior, porque las disposiciones tildadas de inconstitucionales, *revisten el carácter de heteroaplicativas de realización futura* y, en razón de ello, su individualización se encuentra condicionada; sin que en el caso, las peticionarias del amparo hubiesen demostrado que cumplieron con la obligación contenida en tales normas, es decir, que presentaron la información contable digitalizada a través del portal de internet del Servicio de Administración Tributaria, correspondiente al mes de julio de dos mil catorce; por tanto, no se ha actualizado un agravio personal y directo en su esfera jurídica.

En abono a lo anterior, continúa argumentando la agraviada, las reglas fiscales impugnadas solamente establecen lineamientos para el cumplimiento de una obligación formal, por lo que no generan violación alguna a los derechos de las promoventes del amparo, de ahí que, insiste, resulta improcedente la concesión de la suspensión definitiva, dado que la parte quejosa carece de interés suspensivo al no resentir una afectación en su esfera jurídica.

Planteamientos que devienen **inoperantes**.

Tal calificativa obedece a que los motivos por los cuales la autoridad inconforme pretende evidenciar la improcedencia de la

suspensión definitiva de los actos reclamados, los hace depender de la **falta del interés jurídico** de las quejas para acudir al juicio de amparo a controvertir las normas de que se trata, respecto de cuyos efectos se pide la medida cautelar, así como por cuanto hace a la **falta de demostración del acto de aplicación**.

Sin embargo, la falta de interés jurídico —*por los diversos motivos que expresa la autoridad recurrente*—, y en su caso, la falta de demostración del acto de aplicación, son cuestiones que no pueden ser materia de examen en este medio de impugnación, ya que constituyen **una causa de inejercitabilidad de la acción de amparo**, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual sólo puede examinarse en el juicio en lo principal, y no en el incidente de suspensión del que deriva, ni en los recursos que dentro del mismo se hagan valer.

Luego, esos argumentos de disenso no son aptos para que este tribunal examine lo debido o no, del otorgamiento de la medida suspensiva.

Por otra parte, es igualmente **inoperante** el argumento de la autoridad recurrente en el que sostiene que es improcedente la concesión de la suspensión definitiva porque la quejosa **carece de interés suspensivo** al no resentir una afectación en su esfera jurídica.

Lo que se califica en tal sentido porque la agraviada **confunde e identifica el interés jurídico con el interés suspensivo**, al considerar que para la procedencia de la suspensión se debe verificar la afectación que resienta el peticionario del amparo en su esfera de derechos con el acto o la norma que reclama.

Lo que resulta incorrecto, pues como ya se puntualizó, el interés jurídico es un requisito de procedencia de la acción de amparo mas no del otorgamiento de la suspensión, ya que tratándose de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo<sup>2</sup>, los jueces de amparo únicamente deben verificar que se cumplan con dos exigencias, a saber: 1) Que lo solicite el agraviado y 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; luego, no es posible condicionar la procedencia de la suspensión a otras cuestiones que corresponden al fondo del asunto.

En esa medida, resulta igualmente **inoperante** lo alegado por la agraviada en el sentido de que la medida cautelar es improcedente ya que reglas fiscales impugnadas solamente establecen lineamientos para el cumplimiento de una obligación

---

<sup>2</sup> **“Artículo 128.** Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:

*I. Que la solicite el quejoso; y*

*II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.*

*La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.”*

formal por lo que no generan violación alguna a los derechos de la promovente del amparo.

Lo anterior, porque el análisis de la constitucionalidad de las normas reclamadas y la posible transgresión de los derechos humanos de la quejosa, debe realizarse al emitirse la sentencia que resuelva el fondo del asunto; por tanto, tampoco puede examinarse en el presente recurso de revisión, cuya materia, se reitera, se constriñe a analizar la legalidad de la resolución interlocutoria recurrida y, en todo caso, a la verificación del cumplimiento o no de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.

## II. ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL.

En los agravios **segundo, cuarto, sexto, séptimo y octavo**, la autoridad recurrente formula abundantes argumentos encaminados a evidenciar que debe revocarse la concesión de la suspensión definitiva, porque contrario a lo determinado por el juez de distrito, con la concesión de la medida cautelar definitiva sí se genera una afectación al orden público y al interés social.

Planteamiento que se sustenta, en esencia, en los razonamientos siguientes:

- La imposición de la obligación formal prevista en los actos reclamados consistente en ingresar en forma mensual la información contable en forma digitalizada a

través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria vía Buzón Tributario, únicamente constituye un medio de control de la obligación sustantiva, por lo que la suspensión de la aplicación de los ordenamientos reclamados contraviene disposiciones de orden público relativas al cumplimiento de las obligaciones formales a las que se encuentra sujeta la quejosa que, por su naturaleza, no transgreden derecho humano alguno.

- ▶ Debe privilegiarse el interés social por encima del interés particular, lo que impide obsequiar la suspensión de los actos reclamados.
- ▶ La resolución recurrida se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues el *A quo* no analizó si al concederse la suspensión definitiva a la parte quejosa, se afectaría el interés social y en su caso, si se contravendrían disposiciones de orden público; además, perdió de vista que la pretensión de ésta es paralizar la obligación adjetiva establecida en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, es decir, no llevar los registros o asientos que integran su contabilidad en medios electrónicos, así como ingresar mensualmente dicha información contable en el portal del Servicio de Administración Tributaria; de manera que la suspensión concedida para tales efectos por el juez de

distrito, impide a la autoridad exactora ejercer sus atribuciones revisoras.

- ▶ Las disposiciones reclamadas lejos de causar un perjuicio a los particulares, constituyen un beneficio administrativo al agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- ▶ El *hecho de impedir el pago de contribuciones implica que se transgreden disposiciones de orden público y, en consecuencia, se afecta el interés social, dado que las obligaciones fiscales no se centran únicamente en el pago de diversas contribuciones o aprovechamientos.*
- ▶ Con el otorgamiento de la suspensión, se impide que se cumpla con el objetivo primordial de facilitar el pago de impuestos, captar nuevos contribuyentes y acortar los tiempos en que se desarrollan y concluyen las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias.
- ▶ El juez soslayó que el contar con una contabilidad integrada de forma más estructurada y controlada, no puede llevar a concluir que la autoridad estará en aptitud de llevar a cabo cualquiera de las facultades previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.
- ▶ Que “...*en el supuesto sin conceder que...*” este tribunal colegiado considere que por el simple hecho de que la quejosa lleve su contabilidad en medios electrónicos y la

envíe a través del buzón tributario, implica que la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación, ello no es razón para conceder la suspensión definitiva, pues la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de esos procedimientos administrativos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a sus necesidades colectiva.

- ▶ Conforme a la tesis de rubro: ***“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.”***, es improcedente conceder la suspensión definitiva contra la ejecución de los actos de fiscalización previstos en el artículo 42 del Código en cita, cuya finalidad es verificar que los gobernados cumplan con las disposiciones fiscales, así como la comprobación de delitos fiscales.
- ▶ Con la creación del buzón tributario regulado en el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación, se pretende evitar el exceso de formalismos, a través del aprovechamiento del avance tecnológico, ya que se implementó una nueva forma de notificaciones, que además, facilitará las comunicaciones entre autoridades y contribuyentes, con lo cual, se generará economía procesal, al ser un medio rápido y gratuito, eliminando así gastos que requieren los otros tipos de notificaciones, como la personal y por correo.

- Lo que corrobora que la implementación del buzón tributario constituye una cuestión de orden público, pues a través del mismo se pretende fomentar e incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, con la simplificación de los requisitos y trámites administrativos, entre los que se encuentra la notificación.

Los planteamientos sintetizados con antelación, cuya pretensión central es demostrar que fue indebida la concesión de la suspensión de las normas reclamadas, por que con su concesión se contravienen disposiciones de orden público y se afecta el interés social, resultan **inoperantes**.

En primer lugar debe aclararse que en el caso, ni la parte quejosa solicitó la suspensión definitiva de la obligación de llevar la información contable en medios electrónicos, prevista en el numeral 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ni el juez de distrito concedió la medida para tales efectos, pues únicamente la otorgó respecto de los efectos y consecuencias de la fracción IV de esa norma y del diverso artículo 17-K del mismo ordenamiento tributario.

Aclarado lo anterior, este tribunal colegiado considera que, contrariamente a lo alegado por la autoridad agraviada, la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho.

Lo anterior, porque sobre el tema sometido a debate existe



jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la ejecutoria que dirimió la contradicción de tesis 277/2014, en la que estableció que la concesión de la suspensión definitiva, de los efectos y consecuencias de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, no contraviene el orden público ni afecta el interés social, porque su otorgamiento no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación, a través de cualquiera de los procedimientos de fiscalización distintos de la revisión electrónica previstos en la ley, como lo son, la revisión de gabinete y la visita domiciliaria.

La jurisprudencia aludida es de rubro y datos de localización siguientes:

***“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es***

*que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria”.*

*Jurisprudencia 2a./J. 2/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 13 de febrero de 2015 09:00, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008430.*

De la premisas contenidas en dicha jurisprudencia, cuya observancia es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales como este tribunal colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, válidamente se puede concluir que, **cuando se reclaman preceptos y/o reglas que prevén cuestiones de modo, tiempo y forma vinculadas con el uso del buzón tributario, como mecanismo de comunicación con la autoridad tributaria, así como el envío mensual de la información contable, es procedente conceder la suspensión definitiva hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal.**

De ahí que, por más que insista la autoridad inconforme en sostener que no se debió conceder la medida cautelar de mérito,

atendiendo a los beneficios derivados del envío de la información contable a través del buzón tributario, a que se le impide ejercer sus facultades de fiscalización y que se permite el incumplimiento de las obligaciones de la quejosa, no le asiste la razón.

Lo que se estima así, porque aun cuando se concedió la suspensión a las peticionarias del amparo, lo cierto es que subsiste la obligación de éstas de llevar su contabilidad en términos de la legislación de la materia, de tenerlos disponibles en su domicilio fiscal; de proporcionarla en caso de que la autoridad hacendaria se los requiera mediante mandamiento fundado y motivado, así como de cumplir las restantes obligaciones tributarias a su cargo; tampoco se impide que dichas autoridades ejerzan sus facultades de comprobación, pues como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden hacerlo a través de cualquiera de los procedimientos de fiscalización distintos de la revisión electrónica previstos en la ley, como lo son, la revisión de gabinete y la visita domiciliaria, respecto de los cuales no opera la suspensión.

Por otra parte, no pasa inadvertido para este tribunal colegiado lo expuesto como consideración previa por la autoridad recurrente, en el sentido de que en la contradicción de tesis 277/2014, que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 2/2015 (10a), invocada en la interlocutoria recurrida y transcrita con antelación, únicamente se estudiaron y analizaron resoluciones que se dictaron en diversos recursos de queja en las que se

pronunciaron de manera exclusiva respecto de la suspensión provisional solicitada por las empresas quejasas en sus demandas de amparo, pero en ningún momento se hizo referencia de la suspensión definitiva, que es el tema que se controvierte en el presente asunto, por lo que, la aludida jurisprudencia, en el caso, no resulta aplicable.

Argumento que resulta **infundado**, en virtud de que, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil quince, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 8/2015, cuyo punto a dilucidar fue establecer si es procedente conceder la suspensión definitiva contra la aplicación y ejecución del artículo 28, fracciones, III y IV, del Código Fiscal de la Federación; en la que resolvió dejar sin materia dicha contradicción en virtud de que el criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 2/2015 (10a.), “**...no está acotado a la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que debe estimarse exactamente aplicable tratándose de la suspensión definitiva, al imperar las mismas razones y fundamentos.**”

Tampoco asiste razón a la recurrente al afirmar que con la concesión de la suspensión definitiva se impide el pago de impuestos, pues el uso del buzón tributario y el envío de la información contable a través de ese mecanismo, constituye solamente una obligación formal que de ninguna manera incide en el deber de las quejasas de enterar los tributos correspondientes por la actividad gravada que realicen.

### III. APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EFECTOS RESTITUTORIOS

En un diverso aspecto, en el **agravio primero y en parte del cuarto**, la autoridad inconforme sostiene que el juez de distrito concedió indebidamente la suspensión definitiva de los actos que le fueron reclamados, pues si bien conforme a la teoría de la **apariencia del buen derecho** es posible otorgar dicha medida, tal posibilidad no llega al extremo de realizar en el incidente de suspensión un estudio de constitucionalidad y dar **efectos restitutorios** propios de la sentencia principal, al permitir a la parte quejosa no presentar en forma mensual la información contable a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, vía buzón tributario; con lo cual, se le **permitiría incumplir obligaciones formales**.

Planteamientos que resultan **ineficaces**, de acuerdo con los razonamientos que enseguida se exponen.

En efecto, en cuanto a la apariencia del buen derecho, debe señalarse, que conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal<sup>3</sup>, al resolver sobre la suspensión definitiva los jueces de distrito o la autoridad que

---

<sup>3</sup> **“Art. 107.-** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

**X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.**

(...)”

conozca del amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, pueden realizar un análisis de dicha institución para conceder la suspensión definitiva, esto es, pueden efectuar un estudio preliminar de la constitucionalidad del acto impugnado concomitante con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social.

Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: *“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA”<sup>4</sup>*, estableció que si la finalidad de dicha institución es beneficiar al gobernado asegurando provisionalmente el derecho discutido en el amparo, no puede aplicarse en sentido contrario, esto es, para negar la medida cautelar.

En el caso, el juez de distrito al conceder la suspensión definitiva de los efectos y consecuencias de las normas reclamadas **no realizó un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho**, sino que únicamente constató que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, considerando la jurisprudencia que sobre el tema ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que resulte

---

<sup>4</sup> Época: Décima Época. Registro: 2005719. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 10/2014 (10a.). Página: 1292.

ineficaz el argumento de la agraviada en el que pretende evidenciar que el juzgador federal se extralimitó al conceder la medida cautelar mediante un estudio de la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Por cuanto hace a que el otorgamiento de la medida suspensiva lleva implícito el otorgamiento de **efectos restitutorios** que son propios de la sentencia constitucional, tampoco asiste razón a la autoridad inconforme.

Para justificar la **ineficacia** de tal argumento, es necesario atender al contenido del artículo 148 de la Ley de Amparo que establece:

*“Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.*

*En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.”*

De la norma inserta, se desprende que cuando el amparo se promueve contra normas generales con motivo de su entrada en vigor, el juzgador debe otorgar la suspensión definitiva para que no se apliquen a la parte quejosa los efectos y consecuencias de los preceptos cuya inconstitucionalidad reclama, hasta que se notifique a las autoridades responsables la sentencia que se dicte

en el fondo, al resolver el juicio de amparo, evitando así que tales disposiciones lesionen su esfera jurídica, ello siempre y cuando se cumplan los requisitos prescritos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.

En el caso, el juez de Distrito concedió la suspensión definitiva contra los efectos de las obligaciones principales impuestas en las normas reclamadas, al puntualizar:

***“...la concesión de la medida suspensiva es procedente en cuanto a la aplicación de la obligación del contribuyente en ingresar su información contable a través del ‘buzón tributario’, sin que ello implique de modo alguno que ello libere a la parte quejosa del deber de liquidar sus contribuciones o de contar con una contabilidad conforme a los parámetros que exigen las normas tributarias en su conjunto (fracciones II y III del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación)...---Concesión suspensiva que abarca las porciones normativas de las reglas de carácter general que han sido publicadas por el Servicio de Administración Tributaria y tienen relación directa con las obligaciones sustantivas previstas en los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, relativos a la funcionalidad de la remisión de contabilidad electrónica en el medio de comunicación ‘buzón tributario’, pues éstas son meramente operativas –sin que pase desapercibido que constantemente han sufrido modificaciones y/o cambios-; ya que, se insiste, las obligaciones sustantivas ya están impuestas en los arábigos citados, siendo materia de las misceláneas fiscales únicamente el momento de su aplicabilidad. (...) la presente medida cautelar se decreta, hasta en tanto cause ejecutoria el juicio principal del cual deriva la presente incidencia sin que al respecto y dada la materia que nos ocupa exista necesidad de garantizarla. (...)”***

Como se ve, en la resolución interlocutoria recurrida, el juzgador federal fue puntual al precisar que la suspensión



definitiva es una medida cautelar que prevalece hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión.

De lo narrado válidamente puede concluirse que la concesión de la suspensión definitiva no tiene efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo, dado que es una medida que surte efectos de manera temporal hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el juicio principal, pues si se negara, ante la eventual concesión de amparo, no sería posible materializar sus efectos, concretamente, por lo que hace al envío de la información contable a través del buzón tributario, ya que una vez integrada esa información en el sistema electrónico implementado para tal efecto, no sería posible revertirla.

De manera que la concesión de la medida suspensiva no implica la restitución a la parte quejosa de los derechos que estima violados, sino únicamente permite conservar viva la materia del amparo evitando que ésta se consuma de manera irreparable.

#### IV. DAÑOS Y PERJUICIOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

En el **agravio quinto, así como en parte del primero, segundo y sexto**, la autoridad recurrente mediante abundantes argumentos, aduce que la interlocutoria recurrida es ilegal, porque los actos reclamados por la parte quejosa no causan daños y perjuicios de difícil e imposible reparación.

Afirma que la imposición de las obligaciones formales establecidas en las normas reclamadas, lejos de perjudicar a los contribuyentes, constituyen un beneficio administrativo que les proporciona mayor agilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Aunado a lo anterior, continúa argumentando la recurrente, la presentación de la información contable no implica ni siquiera el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, sino una forma de allegarse de información de los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, por tanto, no se causa a éstos un daño de imposible reparación; de ahí que, insiste, fue errónea la determinación del juez de distrito al conceder la suspensión definitiva solicitada por la quejosa.

Destaca que no debe soslayarse que una afectación de imposible reparación solamente se podría materializar con la afectación de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales de los que México sea parte, o bien por violaciones procesales relevantes, lo que en el caso no acontece, precisamente porque las normas reclamadas versan sobre el cumplimiento de una obligación formal, no sustantiva ni en relación con un derecho tutelado por los gobernados.

Argumentos que resultan igualmente **ineficaces**.

Tal calificativa obedece, en primer término a que la Ley de Amparo no sujeta la procedencia de la medida cautelar a que la ejecución del acto reclamado cause daños de **“imposible”** reparación a la parte quejosa; de lo que se sigue que el motivo de disenso de la autoridad parte de una premisa falsa.

Así es, sobre el tema en estudio, el primer párrafo del artículo 139 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone:

***“Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.***

*(...).”*

De acuerdo con la norma transcrita, basta que exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y que esa ejecución le pueda causar daños de difícil reparación a la parte quejosa para que se otorgue la suspensión en su contra; además, no debe perderse de vista que, en la especie, la medida cautelar se pidió contra la ejecución de normas de observancia general; por tanto, en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, esa

medida sólo procede decretarla contra sus efectos y consecuencias.

Aunado a lo anterior, la ineficacia del agravio analizado radica en que se encuentra encaminado a controvertir cuestiones que atañen al fondo del asunto, al sostener que los daños de imposible reparación solamente se podrían materializar con la afectación de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales de los que México sea parte, o bien por violaciones procesales relevantes, aspectos cuyo estudio es materia del juicio principal.

De ahí que tal planteamiento no pueda examinarse en este recurso de revisión, en el cual como se ha señalado reiteradamente en el presente apartado, sólo es posible dilucidar lo relativo a la materia de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, que es precisamente lo atinente a la suspensión definitiva de las normas reclamadas, respecto a la aplicación de sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la parte quejosa, no así la constitucionalidad o no de las obligaciones formales en ella impuestas.

Finalmente, contrariamente a lo alegado por la autoridad agraviada, de no concederse la suspensión contra los efectos y consecuencias de las normas reclamadas, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, ya que al ingresar de manera electrónica sus registros y asientos contables

en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya no sería posible retrotraer los efectos que se pretenden evitar, en tanto que la autoridad ya contaría con esa información.

#### V. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PODRÍA LLEVAR A LA COMISIÓN DE POSIBLES INFRACCIONES.

En parte del **agravio segundo**, la autoridad recurrente argumenta que la suspensión definitiva contra la aplicación de las normas reclamadas otorgada por el juez de distrito, podría tener indirectamente efectos susceptibles de constituir una conducta ilícita sancionada en el artículo 111, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que se permitiría a la quejosa ocultar sus registros contables.

Planteamiento que se estima **ineficaz**, pues la suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar los actos reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia del mismo, evitar perjuicios a la parte agraviada durante su tramitación y, en su caso, asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución definitiva si resulta favorable a ésta.

Consecuentemente, si se otorga la medida cautelar para que los efectos y consecuencias de las normas reclamadas —*con motivo de su entrada en vigor*—, no se apliquen a la parte quejosa, concretamente para que no remita su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, la falta de cumplimiento de esa obligación de ninguna manera puede constituir una infracción a la

legislación fiscal, justamente porque el órgano de control constitucional ha suspendido judicialmente la aplicación de dichas disposiciones hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio.

Para concluir con los agravios debe señalarse que, al existir jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, sobre la procedencia de la concesión de la suspensión contra la aplicación y efectos de las normas que establecen *la obligación a los contribuyentes de emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria*, así como *de enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria*, no benefician legalmente a la agraviada las tesis y precedentes que invoca en el oficio de agravios.

En las relacionadas condiciones, ante la ineficacia de los agravios analizados lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar la resolución recurrida.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** En la materia de la revisión, se **confirma** la interlocutoria recurrida.

**SEGUNDO.** Se concede a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al resto de las quejas,  
la suspensión definitiva de los efectos y consecuencias de las

normas reclamadas, en los términos establecidos en la interlocutoria que se confirma.

**Notifíquese;** con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por unanimidad de votos de los Señores Magistrados: Presidente, Luis Fernando Angulo Jacobo, Andrea Zambrana Castañeda y César Thomé González, siendo ponente la segunda de los nombrados.

Firman los magistrados, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

### **RÚBRICAS**

FIRMADOS: MAGISTRADO PRESIDENTE: LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, MAGISTRADA PONENTE: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA, MAGISTRADO: CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ, Y LA SECRETARIA DE ACUERDOS: GEORGINA VALENZUELA MARTÍNEZ. RÚBRICAS.

En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracciones II y VI, 13°, fracción IV, 14°, fracciones I y IV, y 18°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 2°, fracciones VIII y IX, XXI y XXII, 8°, párrafo tercero y 9°, segundo párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia Federal para la aplicación de la Ley Citada, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

